

Concepción, veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece **Juan Carlos Muñoz Torres**, abogado, RUN 6.232.9815, domiciliado en calle Teatinos N°251, oficina 404, de la comuna de Santiago, y recurre de amparo en favor de su representado **CLAUDIO VIVANCO ACUÑA**, en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Talcahuano en causa RIT 5201-2018, de fecha 5 de noviembre de 2024, que acoge incidente de nulidad interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos, y anula todo lo obrado a partir de la audiencia de preparación de juicio oral verificada con fecha 18 de octubre de 2022.

Señala que dicha resolución, que acoge la nulidad, consecuentemente, ANULA EL ACUERDO REPATORIO, de fecha 28 de mayo de 2024, aprobado por el Tribunal competente, el ente persecutor Fiscalía; la víctima esto es el Servicio Nacional de Aduanas. Asimismo, la resolución en comento además anula lo ya resuelto de fecha 23 de agosto de 2024, esto el Sobreseimiento Definitivo Parcial, respecto de su representado CLAUDIO VIVANCO ACUÑA.

Desarrolla el recurso abordando los siguientes aspectos: la declaración de nulidad decretada en autos resulta improcedente; sobre la cosa juzgada y sus efectos en relación al acuerdo reparatorio; sobre la nulidad y sus limitaciones; sobre la irreversibilidad de los acuerdos reparatorios; y deber de protección a los derechos fundamentales.

Solicita, en definitiva, se deje sin efecto la resolución que declaró la nulidad del acuerdo reparatorio, restableciendo el imperio del derecho y asegurando la debida protección del amparado, declarando que se revoca la declaración de nulidad, por tanto, el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSNPXRUIJXMG

acuerdo reparatorio mantiene plena vigencia y eficacia jurídica, se mantienen los efectos de cosa juzgada del mismo y se garantiza la libertad personal del amparado.

A este recurso rol 575-2024 se acumuló el amparo rol 576-2024, deducido por **Mauricio Massa Montoya**, RUT 12.435.081-6, abogado, Defensor Penal Público, con domicilio en calle Colón N° 916 de la comuna de Talcahuano, en favor de **BÁRBARA HELLEN ILUFÍN BRAVO**, RUT 18.812.167-5, con domicilio en Pasaje 7-A N° 3557 Las Salinas, comuna de Talcahuano; **BÁRBARA LUCÍA BRAVO ESCALONA**, RUT 12.921.387-6, con domicilio en Pasaje 7-A N° 3557 Las Salinas, comuna de Talcahuano; **LUIS ANTONIO ILUFÍN MORALES**, RUT 12.122.337-6, Pasaje 7-A N° 3557 Parque Las Salinas, comuna de Talcahuano; **ELENA DEL CARMEN MORALES MARTÍNEZ**, RUT 5.822.953-9, con domicilio en Pasaje 2 CASA N ° 3917 La Floresta 3, comuna de Hualpén; y **SOLANGE LUCÍA BRAVO ESCALONA**, RUT 13060137-5, con domicilio en Pasaje La Gineta 4681, Alto Costanera, comuna de Hualpén, y en contra del juez titular del Juzgado de Garantía de Talcahuano **FELIPE ANDRÉS NORAMBUENA BARRALES**, RUT 13052713-2, con domicilio en calle Colón N° 1115 de la comuna de Talcahuano, por la resolución pronunciada en audiencia de 5 de noviembre de 2024, por la que se declara la nulidad de todo lo obrado en la causa RIT N ° 5201-2018 del Juzgado de Garantía de Talcahuano.

Señala, como antecedentes, los siguientes: que ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano se tramita la causa RIT 5201- 2018, iniciada el 26 de septiembre de 2018. Versa sobre los delitos de contrabando del artículo 168 del DFL 30 de 4 de junio de 2005, que contiene la Ordenanza de Aduanas; lavado de activos del artículo 27 de la ley 19913; comercio clandestino del artículo 97 n °8 y 9 del Código Tributario; y asociación ilícita de los artículos 292 y siguientes del Código Penal; que el compareciente, en su calidad de defensor penal público,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSNPXRUIJXMG

tiene a su cargo la defensa de las personas individualizadas más arriba, a quienes se les imputa en cada uno de estos delitos, la calidad de autores de delito consumado; que juntamente con esta causa, se tramita la causa RIT 1677-2018 RUC 1810023467-6, iniciada por querella del Servicio de Impuestos Internos (en adelante, SII). La imputación fue realizada a EDUARDO VÍCTOR GÁRATE MORA, RUT N° 12.279.252-8, atribuyéndole el Servicio la calidad de autor de los delitos contemplados en el artículo 97 n ° 8 y 9 del Código Tributario. Dentro de la querella, se aclara que *"La presente acción penal por delitos tributarios se dirige única y exclusivamente en contra de la persona singularizada de manera expresa y nominativa en ella, extendiéndose sólo a los hechos que en su texto se detallan, de manera que la facultad otorgada a este Servicio por el inciso primer del artículo 1c2 del Código Tributario, debe entender ejercida, para todos los efectos legales, sólo respecto de dicha persona y por tales hechos. En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto por la mencionada disposición, la habilitación que condene la presente acción penal por delitos tributarios, no se extiende a otras personas o a otros hechos que pudiesen aparecer durante la investigación penal, aún cuando se encuentren vinculados a los que son objeto de esta presentación."*; que los hechos sobre los que versa esta querella del SII dicen relación con las investigaciones siguientes, de la Fiscalía Local de Talcahuano: RUC 1700725674-4, en donde se investigan los hechos ocurridos el 20 de julio de 2017 en la intersección de las calles Carlos Dittborn y Carlos Peine del sector Las Higueras de la comuna de Talcahuano. Se detectó por parte de funcionarios policiales a un individuo que ofertaba a viva voz, cigarrillos de marcas extranjeras, en la suma de mil pesos cada una. Se incautaron en ese procedimiento un total de siete mil cajetillas de marcas



extranjerías. RUC 1800149479-8, en donde se investigan hechos ocurridos el 1 de febrero de 2018, en calle Carlos Dittborn de la comuna de Talcahuano se detecta por parte de efectivos policiales al querrellado ofertando a viva voz cajetillas de cigarrillos de marcas extranjeras. Se incautó en esa oportunidad casi siete mil cajetillas de cigarrillos de marcas extranjeras; que esta querrela RIT 1677-2018 fue acumulada a la investigación RIT 5201-2018 según da cuenta la presentación del Ministerio Público de 20 de diciembre de 2018. El 21 de diciembre de 2018 el tribunal proveyó a esa presentación "Al punto I: Previo a proveer, constando en causa RUC 1700725c74-4 RIT 5201-2018, sólo una autorización de entrada, registro e incautación de un vehículo sobre delito de lavado de activos y contrabando; y que la causa RUC 18100234c7-c RUC (SIC) 1c77-2018 se trata de una querrela por delitos tributarios, aclárese la agrupación. Al punto II: como se pide." Notificado que fue el persecutor, no cumplió con lo ordenado; que dentro de la tramitación de la causa RIT 5201-2018, se realizó el control de la detención el 12 de agosto de 2020, en virtud de una orden de detención emanada del Juzgado de Garantía de Talcahuano. Los imputados cuya detención se controló fueron: EDUARDO VÍCTOR GÁRATE MORA, BRYAN ALFREDO LEONARDO GÁRATE ILUFÍN, VANESSA DEL CARMEN ILUFÍN MORALES, LUIS ANTONIO ILUFÍN MORALES, ELENA DEL CARMEN MORALES MARTÍNEZ SOLANGE FILOMENA ILUFÍN MORALES, MARIELA ALEJANDRA JARA ÁVILA, BÁRBARA LUCÍA BRAVO ESCALONA, CLAUDIO PATRICIO VIVANCO ACUÑA, ALEJANDRO HÉCTOR UBILLA FAUNE WILSON GALDIMIR CARRASCO FIGUEROA, y PABLO JAVIER LAGOS FIGUEROA. Se accedió a la ampliación de la detención solicitada por la fiscalía, fijándose la audiencia de formalización para el 13 de agosto de 2020. La audiencia de formalización se llevó a cabo el 14 de agosto de 2020 y terminó el 15 de agosto de ese mismo año, en horas de la madrugada. En la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSNPXRUIJXMG

audiencia de formalización la abogada del Servicio Nacional de Aduanas hizo presente que ha presentado dos querellas contra el imputado Eduardo Víctor Gárate Mora bajo los RIT 7762-2019 y 2817-2020, además de que la Dirección Regional de Aduanas presentó denuncia en Fiscalía contra Bárbara Bravo Escalona y Luis Ilufín Morales, cuyos RUC son 1910005058-K y 1900504704-0, respectivamente y sin perjuicio de las querellas que se presentaren con posterioridad. Ante la consulta del tribunal acerca del destino de esas presentaciones, el Ministerio Público señaló que *"... estas investigaciones se encuentran agrupadas a la causa, incluso hay otras agrupadas; y que todas las investigaciones relacionadas con el Servicio de Aduanas y Servicio de Impuestos Internos y otras denuncias están agrupadas en la causa 5201- 2018."*; todo ello según se dejó constancia en el acta de la audiencia señalada.

Agrega que el Ministerio Público acumuló todas las investigaciones dirigidas en contra de los imputados nombrados más arriba en curso a esa fecha, a la causa RIT 5201-2018 RUC 1700725674-4 quedando vigente esta para todos los efectos. Luego de cerrada la investigación, se presenta acusación del Ministerio Público el 5 de septiembre de 2022, en donde se acusa a los imputados que se señalan a continuación, como autores de delitos consumados, de las siguientes figuras penales:

- EDUARDO VÍCTOR GÁRATE MORA, RUN n° 12.279.252-8
- VANESSA DEL CARMEN ILUFÍN MORALES, RUN n° 12.524.428-9
- BRYAN ALFREDO LEONARDO GÁRATE ILUFÍN, RUN n° 18.111.004-K
- MARIELA ALEJANDRA JARA ÁVILA, RUN n° 18.137.302-4
- LUIS ANTONIO ILUFÍN MORALES, RUN n° 12.122.337-6
- BÁRBARA LUCÍA BRAVO ESCALONA, RUN n° 12.921.387-6



- BÁRBARA HELLEN ILUFÍN BRAVO, RUN n°18.812.167-5
- ELENA DEL CARMEN MORALES MARTÍNEZ, RUN n° 5.822.953-9
- SOLANGE FILOMENA ILUFÍN MORALES, RUN n°13.060.137-5
- CLAUDIO PATRICIO VIVANCO ACUÑA, RUN n°7.060.759-K
- WILSON GLADIMIR CARRASCO FIGUEROA. RUN n° 16.735.838-1, y
- PABLO JAVIER LAGOS FIGUEROA. RUN n° 18.431.675-7.

Se les acusa de: asociación ilícita (artículos 292 y 293 del Código Penal), receptación aduanera en base a contrabando (artículos 182, 168 y 178 de la Ordenanza de Aduanas), comercio clandestino (artículos 97 n ° 8 y 9 del Código Tributario) y lavado de activos (artículo 27 letras a y b de la ley 19913).

Complementa que luego de varios intentos, se lleva a cabo la audiencia de preparación de juicio oral el 28 de mayo de 2024, en lo que se obró lo siguiente:

- Se modificó la acusación respecto de sus defendidos LUIS ANTONIO ILUFÍN MORALES, BÁRBARA LUCIA BRAVO ESCALONA, BÁRBARA HELLEN ILUFÍN BRAVO, SOLANGE FILOMENA ILUFÍN MORALES y ELENA DEL CARMEN MORALES MARTÍNEZ, en el sentido de que se retiraron los hechos y las calificaciones jurídicas referidas a los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y comercio clandestino, quedando sólo en pie la imputación por el delito de receptación aduanera con base en contrabando, con el mismo grado de desarrollo y participación.
- Acto seguido, se pactó respecto del acusado LUIS ANTONIO ILUFÍN MORALES y el Servicio Nacional de Aduanas, un acuerdo reparatorio consistente en el pago de la suma de cuatro millones de pesos, y prestando su autorización para la destrucción de los objetos y elementos del delito que fueron



incautados en su poder. Como quedó constancia en el registro de audio, esta suma de dinero se pagaría con cargo a los dineros incautados al acusado por parte de la policía, y que se harían llegar al Servicio de Aduanas.

- Respecto a los acusados BÁRBARA LUCÍA BRAVO ESCALONA, BÁRBARA HELLEN ILUFÍN BRAVO, SOLANGE FILOMANTA ILUFÍN MORALES y ELENA DEL CARMEN MORALES MARTÍNEZ, se pactó entre ellos y la Fiscalía una suspensión condicional del procedimiento por el término de un año, y con las condiciones de las letras 238 letras g) y h) del Código Procesal Penal.

Todo lo obrado fue propuesto por el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Aduanas, aceptado por los imputados debidamente asistidos por la defensa letrada, y aprobados por la magistrada que presidió la audiencia.

Expresa que a propósito de solicitudes realizada por otra de las defensas de en esta causa, la jueza titular del Juzgado de Garantía de Talcahuano doña ANTONIA GODOY MEDINA decide declararse inhabilitada para seguir conociendo de la causa, fundado en lo señalado en el artículo 19 n ° 3 de la Constitución Política de la República, desconociendo esta defensa los hechos en los que se fundaría esa inhabilitación. Con motivo del oficio de la Fiscalía Regional n ° 1567/2024 al que se alude en el próximo párrafo, se supo que la magistrada habría puesto en conocimiento de la Fiscal Regional de lo ocurrido en la audiencia de 28 de mayo de 2024, en particular de la actuación del fiscal Mauricio Richards en cuanto a que *"procedió a modificar la acusación tanto en la descripción de los hechos como en la calificación jurídica de los mismos, dejando vigente sólo el delito de receptación aduanera con base de contrabando de los artículos 182, 1c8 y 178 de la Ordenanza de Aduanas,*



eliminado los delitos de asociación ilícita, comercio clandestino y lavado de activos." Luego, se informa de los pactos de salidas alternativas a los que ya aludimos.

Indica que el 30 de agosto de 2024 comparece Gastón Rivera Espinoza, abogado del Departamento Jurídico de la VIII Dirección Regional, querellante en representación del Servicio de Impuestos Internos, solicitando la nulidad de todo lo obrado desde la audiencia de 18 de octubre de 2022, argumentando que tiene la calidad de interviniente en este procedimiento desde el 25 de mayo de 2018, oportunidad en que interpuso querella criminal contra Eduardo Víctor Gárate Mora, y que, por no haber sido emplazado debidamente a las actuaciones del mismo, se la ha impedido en su calidad de víctima ejercer los derechos y garantías contemplados en la ley en su favor. Funda sus argumentaciones en que las agrupaciones que el Ministerio Público realizó de la investigación iniciada por la querella deducida por el Servicio, no le fue notificada, como tampoco le fueron comunicadas el resto de las actuaciones. Sólo se enteró de esta agrupación por el oficio enviado por la Fiscal Regional del Bío Bío n ° 1567/2024 de 28 de agosto de 2024, como también del estado procesal de la causa. Agrega a ello que la imposibilidad de actuar dentro del procedimiento sólo se puede remediar con la declaración de la nulidad solicitada. En cuanto a la oportunidad, refiere que está dentro del término legal de cinco días toda vez que "el conocimiento fehaciente" de lo obrado sólo lo tuvo en la fecha señalada por medio del oficio indicado.

Añade que a esta presentación, el Juzgado de Garantía de Talcahuano, fija audiencia para debatir acerca de este incidente la que, luego de algunas postergaciones, se lleva a cabo el 30 de octubre de 2024, en una primera etapa, y el 5 de noviembre de 2024, en una segunda oportunidad en que se da a conocer la resolución del



tribunal. La decisión del Juzgado de Garantía fue acoger la incidencia del SII declarando la nulidad solicitada y dejando el procedimiento en estado de tener por notificado al SII de la acusación y la resolución del tribunal de 3 de septiembre de 2022, dejando pendiente la fijación de la audiencia de preparación de juicio oral.

Explica que la resolución del Tribunal deja sin efecto el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento pactados con los acusados LUIS ANTONIO ILUFÍN MORALES, BÁRBARA LUCIA BRAVO ESCALONA, BÁRBARA HELLEN ILUFÍN BRAVO, SOLANGE FILOMENA ILUFÍN MORALES y ELENA DEL CARMEN MORALES MARTÍNEZ, en la audiencia de 28 de mayo de 2024.

En cuanto a los fundamentos de la acción constitucional de amparo en favor de las personas que se señala, expresa que la acción constitucional de amparo está consagrada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República con el objeto de resguardar la garantía de la libertad personal y la seguridad individual asegurada por la Carta Fundamental. La acción puede invocarse *"... en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual."*

Precisa que en el caso descrito, sus defendidos pactaron salidas alternativas al juicio oral dentro de un procedimiento legalmente tramitado, en donde se realizaron actuaciones por entes públicos dentro de sus facultades legales, y finalmente, todo refrendado por un Juez en uso de sus facultades legales, y que la resolución del tribunal, ilegal y arbitraria, expone a los amparados a una persecución penal que puede terminar en una privación de libertad si se impone la pena que ha solicitado el Ministerio Público. Esto constituye una amenaza cierta a la libertad personal y seguridad individual que amerita la intervención de la



magistratura.

En cuanto a la falta de fundamento de la solicitud del Servicio de Impuestos Internos, el recurrente señala que el SII alega, en síntesis, que no tomó conocimiento de lo obrado en esta causa toda vez que no se le comunicó la agrupación de las investigaciones, por una parte, y por otra, como no fue el SII incorporado al sistema computacional, no tuvo forma de imponerse de esta agrupación, como tampoco del resto de las actuaciones procesales, tales como la formalización de la investigación respecto de doce imputados, el cierre de esta, de la acusación y de la modificación a la acusación.

Que llama la atención, en primer término, que el SII alegue que no tuvo como imponerse tanto de la agrupación señalada como del resto de la tramitación, siendo que durante la etapa de investigación la Fiscalía le solicitó información acerca de los acusados, haciendo expresa mención al delito investigado, comercio clandestino, y que el SII contestó, lo que demuestra que tenía conocimiento de la investigación, aportando información al persecutor. El 17 de mayo de 2018 el fiscal adjunto José Orella Laurent dirige oficio n ° 5102-2018 al Director Regional del SII de la región del Bío Bío con el objeto de recabar información tributaria de ocho de los acusados en esta causa, aludiendo a la investigación RUC 1800149479-8 que es una de las incluidas en la querella presentada por el SII en RIT 1677-2018. El requerimiento es contestado el 22 de junio de 2018 por oficio 47 del Director Regional, adjuntando documentación referida a las declaraciones de impuestos de los consultados.

Que, en segundo lugar, llama la atención la falta de diligencia de parte de los abogados institucionales del SII en cuanto a que interponen una querella criminal sin imponerse posteriormente del estado de su tramitación



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSNPXRUIJXMG

ni de las actuaciones de la investigación, para luego de seis años de presentada alegar que no tuvieron forma de saberlo. Lo señalado tiene importancia para el cómputo del plazo para alegar la nulidad, el que no podría contarse desde la data del oficio de la Fiscal Regional, sino de mucho antes; dejando en la extemporaneidad la interposición del incidente de nulidad. Todo ello, sin perjuicio de que desde cualquier punto de vista la omisión del SII en la vigilancia de la tramitación de la querella RIT 1677-2018 constituye, al menos, una negligencia inexcusable.

Y que a ello se suma que el 25 de marzo de 2023, en la causa RIT 1677-2018, originada en la querella del SII contra Gárate Mora, el Juzgado de Garantía solicita información a la Fiscalía Local de Talcahuano acerca del estado de la tramitación de este procedimiento. La resolución fue notificada por correo electrónico al abogado del SII don JULIÁN CARRASCO POBLETE por correo electrónico, según aparece del registro informático, lo cual prueba que el apoderado del SII en esa querella sí tuvo conocimiento de la tramitación de esa causa, contrariamente a lo que indica.

En cuanto a la falta de trascendencia del vicio alegado respecto de los amparados, indica que el artículo 162 inciso primero del Código Tributario señala que *"Las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena privativa de libertad sólo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio. Con todo, la querella podrá también ser presentada por el Consejo de Defensa del Estado, a requerimiento del Director."* La norma, clara en su redacción, impone como requisito previo al inicio de una investigación por delitos tributarios, la denuncia o querella del SII. Esto ha sido remarcado por dicho Servicio en la querella que inicia el RIT 1677- 2018, agregando que la acción ejercida es sólo respecto del



querellado Gárate Mora, no pudiendo extenderse a otras personas o hechos, salvo que aparezcan nuevos antecedentes, ante lo cual el Ministerio Público se lo hará saber, o el Servicio deberá imponerse de ellos de propia iniciativa tal como lo faculta el inciso final del artículo 162.

Que esto reviste importancia en sobre dos aspectos. El primero, la nulidad impetrada por el SII, respecto de los amparados, carece de utilidad. Lo que el SII ha solicitado es que se anule todo lo obrado desde la audiencia de preparación de juicio oral de 18 de octubre de 2022, aludiendo que no tuvo oportunidad para ejercer los derechos que la ley le asegura en el procedimiento, en especial acusar particularmente, adherirse a la acusación, o imponerse de las modificaciones que el fiscal realizó a la acusación. Sin embargo, en base a lo que expresamente dispone el aludido artículo 162 del Código Tributario, sólo podría en teoría ejercer esos derechos respecto del único querellado del SII, EDUARDO VÍCTOR GÁRATE MORA, pero no del resto. Tal como ha quedado asentado, la querella que inicia la causa RIT 1677-2018 es sólo respecto de este encartado, por lo tanto, la nulidad de todo lo obrado no tiene finalidad práctica en lo procesal respecto de sus defendidos porque, respecto de ellos, NUNCA HUBO QUERELLA O DENUNCIA ALGUNA DEL SII.

Que es por este mismo motivo que la nulidad de todo lo obrado decretada por el Tribunal resulta ilegal en su fundamento al reclamar estos mismos argumentos para acceder a lo solicitado por el SII.

Que el artículo 159 del Código Procesal Penal señala que “*Sólo podrán anularse las actuaciones o diligencias judiciales defectuosas del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad.*” Lo obrado en la audiencia de 28 de mayo de 2024 no adolece de defecto alguno que perjudique al SII. Fue retirada de la acusación la imputación por comercio clandestino respecto de sus defendidos, delito por el cual no ha sido



querellado ninguno de ellos, y se llegó a salidas alternativas que no dañan las posibles actuaciones del Servicio. No hay perjuicio que reparar con la declaración de nulidad.

En cuanto a la perturbación o amenaza ilegal y arbitraria a la libertad personal de los amparados, el recurrente afirma que la nulidad decretada es arbitraria e ilegal, porque ha demostrado que la falta de emplazamiento al SII en la causa RIT 5201-2018 se debe a su propia negligencia, y porque, asimismo, tuvo conocimiento de la investigación que el Ministerio Público llevaba a cabo y que sirvió de base a la acusación presentada. Además, incurre en arbitrariedad e ilegalidad al anular actuaciones procesales en las que han participado sus defendidos y que no han irrogado ningún perjuicio procesal al SII, en concreto, las salidas alternativas al juicio de acuerdo reparatorio y suspensión condicional del procedimiento.

Manifiesta que esta situación expone a la continuación de la persecución penal y a la imposición eventual de una pena privativa de libertad, por lo que se verifica la amenaza y perturbación a la libertad personal de los amparados, como lo exige la norma del artículo 21 de la Constitución Política de la República.

Concluye solicitando, en definitiva, que quede a salvo de la nulidad decretada, lo obrado en la audiencia de preparación de juicio oral de 28 de mayo de 2024; que, en consecuencia, queda a salvo de la nulidad y tiene plena validez el acuerdo reparatorio celebrado por LUIS ANTONIO ILUFÍN MORALES, en los términos que fue pactado con el Servicio Nacional de Aduanas, y aprobado por el Juzgado de Garantía de Talcahuano en la audiencia señalada; y que, igualmente, queden a salvo las suspensiones condicionales del procedimiento pactadas por BÁRBARA LUCIA BRAVO ESCALONA, BÁRBARA HELLEN ILUFÍN BRAVO, SOLANGE FILOMENA ILUFÍN MORALES y ELENA DEL CARMEN MORALES MARTÍNEZ, con el Ministerio Público, y aprobadas por el Juzgado de Garantía de Talcahuano, en los términos que constan esa audiencia; todo ello sin perjuicio de las medidas que la Corte estime para restablecer el imperio del derecho.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSNPXRUIJXMG

INFORMA Felipe Norambuena Barrales, Juez titular del Juzgado de Garantía de Talcahuano, detallando los antecedentes que obran en el procedimiento, e indica que la descripción de lo ocurrido en las causas es coincidente con lo expuesto en los recursos de amparo 575-2024 y 576-2024, y adjunta su resolución de 5 de noviembre de 2024, que acogió el incidente de nulidad procesal interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos en audiencia de 30 de octubre de 2024, declarando que se anula todo lo obrado a partir de la audiencia de preparación de juicio oral verificada con fecha 18 de octubre de 2022, y decretó que, atendido los efectos de la nulidad que se acoge, se tiene por notificado de la acusación y resolución dictada con fecha 3 de septiembre de 2022 al Servicio, y que atendida la complejidad de la audiencia, número de intervinientes, ejecutoriada que sea la presente audiencia pasen los autos para la fijación de audiencia de preparación de juicio oral correspondiente.

A continuación se transcriben los considerandos de la resolución de 5 de noviembre de 2024 que contienen las razones que tuvo el juez para decidir como lo hizo:

"UNDECIMO: *Que asumida por esta Magistratura la calidad de interviniente del Servicio de Impuestos Internos, la circunstancias de no haberle sido notificada ninguna de las resoluciones dictadas a partir de diciembre de 2018, y particularmente la resolución recaída en la acusación, permiten corroborar la existencia de un perjuicio consistente en la imposibilidad de ejercer la totalidad de los derechos que le asistían, especialmente aquellos cuya plazo preclusivo lo señala el artículo 261 del Código Procedimiento Civil, estimando esta magistratura que el único remedio del vicio lo constituye la nulidad que se ha de declarar.*

DUODÉCIMO: *Que de acuerdo a lo que se ha venido razonando, viene a colación el artículo 159 del Código*



Procesal Penal que dispone que "Sólo podrán anularse las actuaciones o diligencias judiciales defectuosas del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad. Existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento" y conforme la omisión de las notificaciones respecto del Servicio de Impuestos Internos atentaron contra las facultades o derechos que dicho servicio posee en calidad de interviniente se acogerá la nulidad pretendida en los términos que se dirán en lo resolutivo.

DECIMO TERCERO: Que sin perjuicio de lo razonado precedentemente, la tradicional concepción de la nulidad procesal relacionada con la existencia de vicio legal, perjuicio reparable solo por la declaración de nulidad procesal y alegación, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 160 del Código Procesal Penal, discurre sobre un presunción de derecho del perjuicio, que estaría constituida por el impedimento de ejercer pleno ejercicio de las garantías y derechos reconocidos en las leyes, como expresamente ocurre en la hipótesis del artículo 260 del Código Procesal Penal.

DECIMO CUARTO: Que el tribunal considerando lo dispuesto por el artículo 165 del Código Procesal Penal, y la específica petición de la incidentista, se anulará la audiencia de preparación de juicio oral verificada en este Tribunal el día 18 de octubre de 2022 y demás actuaciones posteriores..." (sic)

Concluye su informe expresando que "De lo extensamente referido en el contenido de la resolución que se cita precedentemente, aparecen los motivos que permiten colegir los fundamentos de hecho y de derecho que llevaron a declarar la nulidad de lo obrado que incide en la acción de amparo de autos, que se estima no



ha infringido norma legal ni constitucional alguna."

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de amparo tiene por objeto que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes pueda ocurrir a la magistratura a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. El mismo recurso, y en igual forma, puede ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

El recurso de amparo es preventivo cuando busca prevenir toda perturbación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual.

SEGUNDO: Que, de entrada, debe tenerse en claro que la acción constitucional de amparo no es la vía idónea para obtener que esta Corte enmiende, con arreglo a derecho, la resolución de 5 de noviembre de 2024 que acogió el incidente de nulidad procesal, pues el habeas corpus, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de la República, está dirigido únicamente a proteger a *"Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de los dispuesto en la Constitución o en las leyes...o que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal o seguridad individual..."*

TERCERO: Que en sus recursos, ninguno de los comparecientes realiza una exposición manifiesta y circunstanciada de cómo la cuestionada resolución afecta a los amparados en alguno de los términos que prevé el citado artículo 21 de la Carta Fundamental.

En el primer recurso nada al efecto se detalla, y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSNPXRUIJXMG

en el segundo sólo se hace una afirmación genérica al respecto en orden a que "...esta situación expone a la continuación de la persecución penal y a la imposición eventual de una pena privativa de libertad, por lo que se verifica la amenaza y perturbación a la libertad personal de los amparados...".

CUARTO: Que la afirmación inespecífica del segundo recurrente anotada, importa sostener, nada menos, que todo el que enfrente un proceso penal es víctima de una amenaza y perturbación a su libertad personal y seguridad individual de manera ilegal.

QUINTO: Que la afirmación en cuestión, en que se apoya el recurrente para sostener su arbitrio, es inconcebible de frente a toda la normativa que gobierna el derecho procesal en nuestro ordenamiento jurídico, en que destacan, a modo ejemplar, los siguientes derechos: al debido proceso, a defensa jurídica, a la libertad personal y seguridad individual, a un tribunal imparcial, a la presunción de inocencia, a la legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad, a la cautela de garantías, a que el Ministerio Público proceda con estricta sujeción al principio de objetividad, a las garantías que le confieren las leyes al imputado, a amparo ante el juez de garantía, a declarar como medio de defensa, a la intervención del juez de garantía ante las medidas que solicitare el Ministerio Público para realizar actuaciones que privaren, restringieren o perturbaren el ejercicio de derechos asegurados por la Constitución, a que las medidas cautelares personales sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsistiere la necesidad de su aplicación, las que serán siempre decretadas por medio de resolución fundada, a un juicio previo, oral y público desarrollado conforme al Código Procesal Penal, y a los recursos procesales.

SEXTO: Que, en este escenario, demostrado que el



proceso penal que los amparados hubieren de enfrentar no se cierne como una amenaza o perturbación ilegal a su libertad personal y seguridad individual los recursos no podrán prosperar;

SÉPTIMO: Que refuerza lo anterior, la excepcionalidad de la acción de amparo al momento de optar dentro de la diversidad de recursos procesales que contempla el ordenamiento jurídico, a favor de quien pretende alzarse en contra de una resolución judicial, que, en el presente caso, no fue apelada. Al respecto, la Excma. Corte Suprema de Justicia, refiriéndose al recurso de amparo ha expresado: "(...) semejante comprensión de la acción en análisis supone la excepcionalidad de su procedencia si, como en el caso en análisis, se pretende atacar resoluciones dictadas por los tribunales de justicia en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo al procedimiento fijado en la ley, sobre todo si éste contempla mecanismos de impugnación de lo resuelto y que permiten al tribunal designado por el ordenamiento jurídico procesal para la resolución de los recursos que se deduzcan, el máximo grado de conocimiento sobre los hechos, con el objeto de asegurar la sujeción de lo decidido al mérito del proceso y a la ley correspondiente" (sentencia en causa Rol N°4.965-2013), y que también refiere el Amparo 603-2023, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel.

OCTAVO: Por lo ya razonado, es que la resolución impugnada a través de esta acción constitucional fue adoptada por tribunal competente, en uso de sus facultades legales y con la debida fundamentación, sumado al hecho que no se interpusieron los recursos que contempla el ordenamiento procesal, todo lo que lleva a concluir que esta acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 21 de la Constitución



Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve, que: **SE RECHAZAN, sin costas,** los recursos de amparo deducidos por los defensores Juan Carlos Muñoz Torres, en favor de **CLAUDIO VIVANCO ACUÑA,** y Mauricio Massa Montoya, en favor de **BÁRBARA HELLEN ILUFÍN BRAVO, BÁRBARA LUCÍA BRAVO ESCALONA, LUIS ANTONIO ILUFÍN MORALES, ELENA DEL CARMEN MORALES MARTÍNEZ, y SOLANGE LUCÍA BRAVO ESCALONA,** en contra del juez titular del Juzgado de Garantía de Talcahuano FELIPE ANDRÉS NORAMBUENA BARRALES, en relación a la resolución de cinco de noviembre de dos mil veinticuatro que dictó.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y archívese en su oportunidad.

Redacción del fiscal judicial Hernán Amador Rodríguez Cuevas.

Rol Amparo N° 575-2024, acumulado el 576-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSNPXRUIJXMG

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Claudio Gutierrez G., Ministra Suplente Claudia Andrea Vilches T. y Fiscal Judicial Hernan Amador Rodriguez C. Concepcion, veintidos de noviembre de dos mil veinticuatro.

En Concepcion, a veintidos de noviembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSNPXRUIJXMG